



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0531

Número Interno:	2022-0048
CUI:	2543060006602016-000996
Sentenciada:	AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS
Delito:	TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES
Decisión:	NIEGA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL

1. OBJETO A DECIDIR

Resolver respecto de la solicitud de extinción de la sanción penal por prescripción, propuesta por la apoderada de la sentenciada **AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.070.985.313.

2. CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley-1709 de 2014- concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3. RESEÑA PROCESAL

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Facatativá (Cundinamarca) en sentencia del 28 de julio de 2016 resolvió condenar a **AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS**, identificada con cédula de ciudadanía No 1.070.985.313, a la pena principal de DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN, multa de CERO PUNTO TREINTA Y TRES (0,33) y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la prohibición de consumir sustancias estupefacientes por igual término al de la pena principal al encontrarla autora del punible de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES**. A la sentenciada le fueron negadas tanto la suspensión condicional de la ejecución de la pena como la prisión domiciliaria y ordenó librar la captura correspondiente.

Las diligencias fueron recibidas en este estrado judicial el 5 de octubre de 2016, con orden de captura.

La Dra. DIANA CAROLINA GIRALDO, apoderada de la señora condenada, solicitó la extinción de la sanción penal por prescripción, a favor de su prohijada. Previo a estudiar la posibilidad de declaratoria de prescripción de las diligencias, mediante auto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

sustanciación No. 0458 del 5 de mayo de 2022, el despacho solicitó la actualización de antecedentes de la señora condenada.

La apoderada de la señora condenada interpuso acción constitucional de tutela contra el juzgado, siendo vinculado este despacho el 8 de julio de 2022.

A través de nuevo auto de sustanciación, No. 0640 del 7 de julio de 2022, se ordenó que por secretaría se oficiara al Juzgado 025 de Ejecución de Penas de la ciudad de Bogotá a efectos se remitiera copia de la sentencia condenatoria dentro del proceso con CUI 11001600000020200288, por cuanto se trataría de un delito cometido que posiblemente habría interrumpido el término de prescripción dentro de las presentes diligencias.

El 14 de julio de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Penal, resolvió negar la acción de tutela instaurada, ante la ausencia de vulneración de derechos fundamentales de petición y debido proceso.

El 22 de agosto del presente año, fue remitida por parte de la Seccional de Investigación Criminal e INTERPOL, la actualización de antecedentes de la señalada condenada.

El 30 de agosto del presente año se recibió la información solicitada a los homólogos de Bogotá.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020¹ del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: "[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento

¹ ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020



dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*².

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1 Competencia

En razón a la fecha de los hechos que dieron origen al proceso que se estudia ocurridos durante el año 2016, se tiene que la actuación se surtió de conformidad con el Código Penal –Ley 599 de 2000 - y el Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2002.

Es competente este juzgado en conocer, vigilar la pena impuesta, así como decidir sobre las peticiones radicadas por el condenado conforme los Acuerdos expedidos por el

² CSJ RAD 794 (01-07-20)



Consejo Superior de la judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007³..

4.2 De la Ejecutoria de una sentencia

El artículo 169 de la Ley 600 de 2000 clasifica las providencias que se dicten en una actuación en resoluciones, autos y sentencias. A su vez señala que se denominan sentencias si deciden sobre el objeto del proceso, bien sea en primera o segunda instancia, en virtud de la casación o de la acción de revisión.

El artículo 187 de la Ley 600 de 2000, norma que regulaba lo concerniente a la ejecutoria de las providencias en materia penal cuando se inició, tramitó y definió el proceso adelantado contra el condenado, disponía que Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes. Continúa la norma diciendo que la que decide los términos de apelación o de queja, contra las providencias interlocutorias, la consulta, **La que decide el recurso de casación**, salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, y las que deciden la acción de revisión, **quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.**

4.3 DE LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN

La pretensión punitiva del Estado, admite para las penas, diversas causas de extinción que se encuentran catalogadas en la ley como i) la extinción de la acción penal y ii) extinción de la pena. Sin embargo, estos fenómenos están sometidos a un tratamiento diverso, cuyas causas el legislador estipuló y se encuentran consagradas en el estatuto penal.

De conformidad con los artículos 88 y 89 del Código Penal de la Ley 599 de 2000 se tiene que la extinción de la acción penal goza de diferentes causas que la originan y en el momento de presentarse produce dicha extinción.

Reza el artículo 88 del C.P:

“ARTICULO 88. EXTINCION DE LA SANCION PENAL. Son causas de extinción de la sanción penal:

- 1. La muerte del condenado.*
- 2. El indulto.*
- 3. La amnistía impropia.*
- 4. La prescripción.***
- 5. La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operen como accesorias.*
- 6. La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley.*
- 7. Las demás que señale la ley.” (Resalta fuera de texto)***

A su turno el artículo 89 del mismo estatuto estipula que la pena privativa de la libertad prescribe en el término fijado en la sentencia o también en el que falte por ejecutar con un mínimo de 5 años y para los demás casos prescribe en 5 años.

“ARTICULO 89. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL. La pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales

³ 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y Guaduas (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)³.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años.

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.”

Aunado a la norma en cita, expresa el artículo 90 del Código Penal:

“Interrupción del término de prescripción de la sanción privativa de la libertad

Art. 90.- El término de prescripción de la sanción privativa de la libertad de interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma.”⁴ (Resaltado fuera del texto original)

De conformidad con lo dispuesto por las normas citadas de manera precedente, es claro que en caso de condenas privativas de la libertad inferior a cinco (5) años, el término de prescripción no será el de la sanción impuesta, sino **CINCO (5) AÑOS** contados a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia.

Pero para las penas superiores a dicho tiempo la figura de la prescripción se da cuando ha cumplido el tiempo de la pena que le fue impuesta al condenado.

Para el caso en particular, tenemos que **AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS**, fue condenado en sentencia del **28 de septiembre de 2016** por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Facatativá una pena principal de **DIEZ (10) MESES Y VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN**.

La decisión quedó en firme y ejecutoriada el **28 de septiembre de 2016**.

Ahora para el término de prescripción como lo señala la norma - artículo 89 de la Ley 599 de 2000 – “prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar...”, razón por la cual el término de prescripción de la misma corresponde a ese mismo tiempo, esto es, **CINCO (5) AÑOS**.

Tenemos que el artículo 90 del Código Penal es contundente al mencionar que el término de prescripción será interrumpido con la captura del sentenciado, esto es, una vez el condenado sea aprehendido y dejado a disposición de la autoridad competente. Significa ello que, si antes de haber transcurrido el término de prescripción –*que para el caso en particular corresponde a cinco años*- es capturado el sentenciado, el mismo habrá sido interrumpido, lo que automáticamente descarta la posibilidad de ser decretada la prescripción en favor de quien fuere condenado.

En el caso concreto de **AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS**, observa este funcionario que el juez fallador ordenó se libaran las órdenes de captura una vez quedó ejecutoriada la sentencia.

En este sentido se tiene que desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia – **28 DE SEPTIEMBRE DE 2016** – a hoy han transcurrido los **CINCO AÑOS** requeridos para que prescriba la pena a la que fue condenada la señora **AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS**.

⁴ Artículo 90, Código Penal, Ley 599 de 2000

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Pese a lo anterior, dicha señora incurrió en nuevas conductas delictivas que llevaron a proponerle otra sentencia condenatoria el **18 de noviembre de 2020, situación que INTERRUMPIÓ el término de la prescripción dentro de las presentes diligencias.**

Lo anterior teniendo en cuenta la sentencia condenatoria del CUI 11001600000020200288, emitida el 18 de noviembre de 2020

Así las cosas, es claro para este servidor que en la causa seguida en contra de **AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS** no opera la prescripción de la sanción penal toda vez que la sentenciada cometió otro delito, por el cual se encuentra privada de la libertad actualmente y el proferimiento de dicha sentencia se dio antes de la prescripción de la sanción en presente la causa.

Además ha sido pacífica la jurisprudencia en señalar que la prescripción se consolida no solo en el transcurso del tiempo pues como se dijo el término cuenta a partir de su ejecutoria y al ser capturado el sentenciado por cuenta de otro proceso por el que se encuentra descontando pena, al no ser las sentencias acumulables, no es posible que el interno comience a descontarlas simultáneamente por lo tanto no existe abandono a la facultad punitiva del estado luego entonces el término prescriptivo en estas diligencias **SE INTERRUMPIÓ.**

Sobre el tema señaló la H. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

“... Al respecto cabe recordar que la prescripción se consolida no solamente con el transcurso del tiempo, este además debe significar el abandono o el descuido del titular del derecho que deja de ejercerlo y al que se le extingue en consecuencia su interés. Por eso es que en todos los ordenamientos se consagra la posibilidad de interrumpir un término prescriptivo si el titular desarrolla un acto positivo que pueda ser entendido inequívocamente como la reivindicación de su prerrogativa.

Tratándose del ius puniendi, potestad del Estado, la prescripción extintiva se manifiesta en un mandato de prohibición a sus autoridades para que se abstengan de hacer efectiva la sanción impuesta, si dejaron transcurrir el término que sus propias reglas fijaron para lograr el sometimiento del responsable penalmente, con el entendido del decaimiento del interés punitivo denotado en el hecho de que ante la incapacidad para aplicar la pena, fenece la pretensión estatal para su cumplimiento...”. (...)

De acuerdo con lo expuesto, las disposiciones sobre la prescripción de la pena, operan con el supuesto de que el condenado se encuentra gozando de la libertad, no obstante que en su contra existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, no así cuando está cumpliendo pena de prisión, aunque sea por causa diferente, pues es evidente que si las sanciones de una y otra sentencia no son acumulable, no es posible que el recluso comience a descontarlas simultáneamente y ello por su puesto no constituye abandono Estatal alguno al ejercicio de su facultad punitiva...”⁵
(Subrayado nuestro)

En otro pronunciamiento sintetizó:

“...Por regla general las sanciones respecto de las cuales el Estado no ejerce o hace efectiva su ejecución, prescriben. Así, por ejemplo, respecto de la pena de prisión, salvo cuando es sustituida por alguno de los mecanismos previstos en la ley para tal efecto, mientras el sujeto pasible de la misma no se halle privado de la libertad, corre el término de prescripción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, inciso primero, del Código Penal, en armonía con el 90 del mismo estatuto. Así las cosas, se dispone

⁵ T-54570 (14-06-11)

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

*denegar la extinción de la sanción penal por prescripción invocada por el condenado a través de su apoderado...*⁶ (Subrayado nuestro)

Téngase en cuenta por la Secretaría del Juzgado que una vez el condenado AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS cumpla con la pena impuesta - Radicado CUI 11001600000020200288 – debe quedar inmediatamente a **DISPOSICIÓN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS**.

Así las cosas, encuentra este juzgado que no es posible extinguir la sanción penal por la poderosa razón de fallar uno de los presupuestos de la prescripción, como quiera que la falta de aplicación de la pena de prisión impuesta **no deriva de la incuria del Estado** sino de que materialmente la misma no se ha ejecutado debido a que AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS no ha saldado sus cuentas por razón de este proceso.

Por la Secretaría del juzgado **PROCÉDASE** a notificar vía correo electrónico a la apoderada de la señora AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS. Así mismo, se **COMISIONARÁ** a la Cárcel El Buen Pastor, Oficina Jurídica, a efectos realice notificación personal a la mencionada de la presente decisión.

Por último, ejecutoriado este auto se ordena la remisión del expediente ante el Juzgado 025 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Bogotá, para lo de su cargo.

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.900 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

⁶ C.S.J. Rad N° 41180 del 11 de junio de 2014, M.P., Dr Eugenio Fernandez Carrier

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la libertad.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»⁷, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”⁸

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *“desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”*.⁹

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

⁷ Ibídem.

⁸ CSJ T 102248

⁹ C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive*, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se presentó en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

Nuevamente se presentaron nuevos actos de vandalismo y en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021. En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año anterior nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Del mismo modo con el personal que contamos (juez, secretaria, asistente social, asistente administrativo y oficial mayor (a partir de noviembre de 2020) para la carga laboral el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la situación jurídica del sentenciado.

6. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá - Cundinamarca,

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

RESUELVE:

PRIMERO. NEGAR LA DECLARATORIA DE EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN a favor de AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No 1.070.985.313, conforme lo consignado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. Por la Secretaría del juzgado **PROCÉDASE** a notificar vía correo electrónico a la apoderada de la señora AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS. Así mismo, se **COMISIONARÁ** a la Cárcel El Buen Pastor, Oficina Jurídica, a efectos realice notificación personal a la mencionada de la presente decisión.

TERCERO. Hecho lo anterior por la Secretaria del Juzgado ejecutoriado este auto se remitirán las diligencias ante el Juzgado 025 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Bogotá, para lo de su cargo.

CUARTO. Téngase en cuenta que una vez la condenada AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS cumpla con la pena impuesta - Radicado CUI 11001600000020200288 – debe quedar inmediatamente a **DISPOSICIÓN DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS**

Contra esta decisión proceden los recursos de reposición ante este funcionario y de apelación ante la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Cundinamarca.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA

Facatativá, 27 de septiembre de 2022
Oficio No. 2150

Doctora:
DIANA CAROLINA GIRALDO
giraldoabogadosasociados@hotmail.com
Bogotá D.C.

Radicado CUI No:	2543060006602016-00906
No. Interno:	2022-0048
Sentenciada:	AURA CRISTINA CASTAÑEDA VARGAS
Delito:	TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES
Decisión:	NIEGA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN.

Cordial saludo.

En atención a lo dispuesto en auto de la fecha, le comunico que este Despacho Judicial NEGÓ LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, dentro de las diligencias de la referencia donde usted actúa como defensor de confianza de la señora condenada.

En consecuencia, mediante esta comunicación se realiza la notificación del auto interlocutorio, proferido el 27 de septiembre de 2022.

Cordialmente,

BLANCA CECILIA GUTIERREZ
SECRETARIA